



Autos: [REDACTED]

[REDACTED] ***POR INFRACCIÓN ART. 303 COD. PENAL***,”

Expte. N° [REDACTED]/2022, Secretaria Penal 1.

SOLICITA ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES

Señor Juez Federal:

Leandro A. Ardoy, Fiscal Federal de Paraná, en las actuaciones de referencia comparezco y digo:

1º.-) Vengo por el presente a manifestar que, corrida vista a este Ministerio Público Fiscal en el incidente [REDACTED] a efectos que se dictamine acerca de la devolución del dinero incautado impetrado por los Dres. Emilio Cornejo Costas, y Julieta Martín Pantano, abogados defensores de la [REDACTED] quienes -inclusive- propugnaron por el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito (cfr. fs. 197/294) considero que luce factible S.S. la declaración de nulidad del acta prevencional labrada conforme el art. 230 bis de CPPN -y lo demás obrado en consecuencia-, tanto como la restitución del dinero, por las razones que describiré a continuación.

Dicho esto, resaltar que en abono de su pretensión, aduce la defensa que no se configuró delito penal alguno, no pudiendo ser considerado el mero traslado de dinero como indicio y/o dato objetivo que sugiera estar frente a la comisión del delito de *lavado de activos* previsto por el art. 303 del CP.

En otro orden de ideas, cuestiona la validez del procedimiento realizado por la fuerza, subrayando que no se observa circunstancia previa y/o concomitante en los términos previstos por el art. 230 bis de CPPN invocado por la fuerza en el acta labrada que justifique una actuación policial en la vía pública prescindiendo -en algunos casos- de orden judicial de inspección o requisa.

En ese corredor, indican que las fuerzas de seguridad no pueden andar por la vía pública “...solicitando billeteras o el vaciamiento de los bolsillos para saber cuanto dinero tiene cada ciudadano y menos aun solicitar explicaciones de su origen...”.

Refiere que la empresa se dedica a la elaboración y comercialización de productos lácteos (leche, yogurt, etc), en conjunto con una de las marcas mas reconocidas y prestigiosas del mercado como [REDACTED] productor que distribuye a supermercados, mercados regionales, almacenes, y quioscos a lo largo y ancho del país.

Siendo usual que se ofrezca a los clientes la apertura de una línea de crédito para adquirir productos y cuya deuda pueden ir cancelando de manera parcial como acontece con la relación comercial que tienen con las distribuidoras de referencia.

En tal aspecto, refiere que la [REDACTED] recibió pagos parciales en efectivo de dichos clientes, respecto de los cuales emite los recibos correspondientes que acompaña.

Que, por otro lado, aluden que no existe lavado de activos, siendo que los hechos investigados no encuadran en la figura típica del art. 303 del



CP, en tanto el tipo para su configuración exige: *i)* un ilícito precedente; *ii)* realización de una conducta típica (vgr. convertir, transferir, etc.); y *iii)* peligro concreto que los bienes de origen ilícito adquieran la apariencia de origen lícito.

Sin perjuicio de esto -prosiguen- la intromisión del personal policial en la privacidad de la Sra. [REDACTED] fue infundada. Agrega que la apertura de esta causa y otras similares, sienta el ejemplo a las fuerzas de seguridad para que requisen a todos los ciudadanos que transiten por el país en búsqueda de dinero en efectivo.

2º.-) Así las cosas, cabe recordar que las actuaciones principales se originan en virtud del hecho constatado en fecha 3 de febrero de 2022 a partir de un procedimiento de control vehicular realizado en el Paraje Paso Telégrafo, Ruta Nacional 12, altura del Km. 646, Distrito Tacuara ubicado en la ciudad de La Paz (E.Ríos), por parte de la Dirección de Seguridad y Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, ocasión en que, siendo las 14.25 horas aproximadamente, detuvo la marcha de un vehículo marca Chevrolet, modelo SONIC, negro, dominio [REDACTED], que circulaba desde Corrientes hacia la citada ciudad entrerriana bajo la conducción de su titular registral, [REDACTED], empleada de la Empresa [REDACTED], con asiento en la ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que se le solicitó exhiba la documentación personal y del rodado *sin que se obtenga novedad alguna.-*

En ese marco, desde la fuerza procedieron a un control de rutina acudiendo los preventores -en primer lugar- al can detector de narcóticos,

siendo en tal caso que hicieron que la conductora abra las puertas del rodado para observar su interior, no verificándose la presencia de material estupefaciente.

Sin embargo, según reza el acta labrada, pudieron apreciar que en el habitáculo trasero del acompañante había un bolso de color marrón y negro, de forma rectangular y una mochila color negra, razón por la que se le preguntó a su conductora si podía abrirlos y exhibir su contenido constatándose que, en el bolso y en la mochila, había bultos de nylon con dinero, ante lo que la sindicada, manifestó que poseía boletas que respaldaban la tenencia de esa moneda de curso legal.

Así es que la encartada puso a disposición de los oficiales actuantes dos (2) comprobantes, uno que rezaba “ [REDACTED] - [REDACTED] ” y escrito a mano alzada “19/1 \$ 271.936”; otra boleta con la leyenda “ [REDACTED] [REDACTED] ” y escrito a mano alzada con lapicera de color negra con el importe de \$ 1.093.176, elementos estos que -a criterio- de la fuerza no correspondían con documentos legales y sustentables para justificar el traslado de dinero.

A continuación, se procedió a controlar el baúl del rodado, y a los fines de constatar la presencia de la rueda de auxilio, es que levantaron la alfombra que cubre su habitáculo para advertir la existencia de dos (2) bolsas que en su interior contenían mas fajos de dinero.

En sentido coincidente, secuestraron del interior del automotor un bolso tipo cartera, de color negro con marrón, con flecos de simil cuero, el que en su interior contenía mas fajos de dinero; un cuaderno anillado de color blanco con una lapicera marca bic, color azul; una mochila negra, marca PRIMICIA, con varios bolsillos y cierres, abriéndose el principal en donde se localizó una notebook, Marca Dell, y un bulto con mas dinero. Se observó un recorte de papel con la leyenda “[REDACTED] \$ 881.280 -12/02/22 ENTREGA”.

A fs. 12/15 este Ministerio Publico Fiscal promueve el ejercicio de la acción penal conforme el art. 180 y 188 del CPPN, y propone a S.S. la practica de una serie de medidas de prueba orientada a determinar el origen y propiedad de dinero incautado.

A su turno, por disposición judicial se procedió al secuestro de la totalidad del dinero ante una presunta infracción a la ley de Activos (Nº 26.683) y se dispuso el deposito de la suma total de \$ 3.746.136,00 en el Banco de la Nación Argentina confeccionándose un plazo fijo con renovación automática del monto e intereses devengados, cada treinta (30) días (fs. 16/17).

3º.-) Así las cosas, es dable destacar que durante la instrucción a cargo del Juzgado Federal de Paraná se arbitraron una serie de medidas conducentes a demostrar extremos vinculados con el origen de los fondos, su destino, perfil patrimonial del investigado, y de otras vinculadas, como determinar la existencia de una posible fuente lícita o ilícita del mismo, o relación con alguna actividad ilícita, en razón de lo que se resolvió disponer el levantamiento del secreto

bancario y fiscal de [REDACTED] y de la firma denominada “[REDACTED]
[REDACTED]”, siendo en consecuencia que se libraron diversos oficios a distintos organismos y/o reparticiones provinciales como nacionales (vgr. Unidad de Información Financiera (UIF), Policía federal argentina, AFIP-DGI, Registros de la Propiedad de automotor e inmobiliarios, etc.).

A su vez, se estableció a partir del informe de vida y costumbres realizado por la Policía Federal Argentina que la encartada trabaja como supervisora zonal (provincia de Corrientes y parte de Chaco) en la empresa de mención con asiento en CABA con una remuneración de \$ 300.000 (19/8/22).-

A fs. 197/286 del expediente principal se encuentra incorporada documental y/o recibos correspondientes a la empresa que fueran acompañados junto al escrito mediante el que la defensa postula el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Cobran especial relevancia distintos recibos expedidos por la Empresa [REDACTED] en favor de la [REDACTED] por el importe de \$ 1.093.200,00; LD [REDACTED] por el monto de \$ 1.499.720,00; [REDACTED] por el monto de \$ 881.280,00 y en favor de [REDACTED] por la suma de \$ 271.936,00, adjuntados a una certificación contable de saldos de cuentas por cobrar emitida por la Contadora Publica (UBA), Dra. Susana Marcela Graf, en el que brinda detalles de las tareas realizadas, conforme la documental que aportara la empresa, mediante la que concluyera que “...la composición del saldo deudor de la empresa [REDACTED] al



01 de febrero de 2022,. *concuerta con la documentación respaldatoria y los registros contables...*"; idéntica conclusión a la que arribó a su vez, respecto de las demás empresas a las cuales le emitiera recibo por operaciones, a saber, [REDACTED] [REDACTED] (cfr. fs. 200/202).

4º.-) Así las cosas, evaluando el destino procesal de la causa, y sin perjuicio del ejercicio de la acción penal instado por este Ministerio Público Fiscal en los albores de la causa, adentrado -ya- en un análisis minucioso de los hechos consignados en el acta labrada por la fuerza -sucinta en el art. 230 bis del CPPN- estimo que corresponde solicitar a S.S. declare la nulidad de ese instrumento -y lo actuado en consecuencia- al evidenciarse serias falencias o defectos que no pueden ser consentidos y que, en caso contrario, irían en contradicción con los deberes y atribuciones otorgados a Ministerio Público Fiscal por la ley 27.148 y Constitución Nacional argentina como representante de los intereses generales de la sociedad y de velar por la regularidad de los procesos; propiciando la declaración de archivo y la devolución del dinero incautado.-

En primer término, subrayar que en el acta de procedimiento se plasmó que se controló la documentación del rodado conducido por su titular registral *sin que se obtenga novedad alguna* respecto a la originalidad de la documentación personal y vehicular exhibida en el caso. -

No obstante, la continuidad del procedimiento se evidenció en ese ámbito público, siendo los funcionarios intervinientes que acudieron a un *can detector de narcóticos* para observar si en el interior del vehículo había material

estupefaciente que indique estar ante una infracción a la ley 23.737 (ley nacional de estupefacientes) sin que sea marcada zona alguna del rodado que amerite la prosecución del control.

Sin perjuicio que, hasta aquí, no se observó alguna circunstancia previa y/o concomitante que justifique inmiscuirse aún más en la intimidad o privacidad de la conductora los funcionarios policiales pidieron a [REDACTED] que abra las puertas del rodado *para observar su interior*.-

Es decir, se apreció un comportamiento normal de la encartada sin demostrar resistencia o reticencia frente a los preventores que implique -en su caso. contar con un dato objetivo que abone una continuidad en la ejecución del procedimiento policial careciendo de orden judicial.

Por lo tanto, sin perjuicio de las prerrogativas con las que cuenta la fuerza para solicitar la exhibición de la documentación que avale la tenencia del rodado y de los elementos de seguridad con que debe contar el mismo conforme a la normativa vigente, no se aprecian las condiciones que habilitarían a inspeccionar el interior del vehículo en el que se transportaba la ciudadana, titular registral del rodado, ni –mucho menos los efectos personales en él habidos.

En tal sentido, ha dicho el Tribunal Oral Federal de esta Jurisdicción que: “... *La autoridad policial no puede invadir la esfera de intimidad de ningún ciudadano sin la autorización fundada de un juez, con excepción de los casos específicamente previstos en el art. 230 bis del Código Procesal Penal, cuando enfrenten situaciones donde se manifiestan indicios de la comisión de un ilícito. (...) Tales condiciones no se verificaron en el caso,*

o por lo menos no se documentó fehacientemente, para que este Tribunal pueda apreciar que existió un legal y legítimo procedimiento, adecuado a los parámetros constitucionales...” (conf. “Rapolla, Fabián Gabriel s/ Infracción Ley 23.737”).

A continuación, pudieron apreciar que en el habitáculo trasero del acompañante había un bolso de color marrón y negro, de forma rectangular y una mochila color negra, razón por la que se le preguntó a su conductora si podía abrirlos y exhibir su contenido constatándose que, en el bolso y en la mochila, había bultos de nylon con dinero, ante lo que la sindicada, manifestó que poseía boletas que respaldaban la tenencia de esa moneda de curso legal.-

Asimismo, debe tenerse presente que el despliegue policial no fue derivado de una objetiva sospecha, dato, indicio o señal exteriorizada de un acontecer delictivo ni producto de una necesidad o urgencia.

Por otro lado, más allá del significativo hallazgo de dinero - cuya tenencia o propiedad ha sido acreditada en la instrucción-, lo cierto es que ello no autoriza a prescindir de los recaudos contemplados en el art. 230 *bis* del Código de rito nacional. Aquél no es susceptible de legitimar *per se* y *a posteriori*, un procedimiento que en su génesis se encuentra viciado.

Ello permite colegir que el acto cuestionado resulta violatorio de garantías constitucionales básicas, correspondiendo su anulación en cualquier estado del proceso, tratándose de una nulidad absoluta en los términos de los arts. 167 inc. 2º, 168 y 172 del Código Procesal Nacional, pues se observa una ilegal y

excesiva actuación de la fuerza de seguridad que dio intervención a la judicatura una vez que se hallaron los primeros fajos de dinero.

5º.-) Así las cosas, en merito a lo descripto en los párrafos que anteceden, ocurro a solicitar de S.S. declare la nulidad de acta prevencional y lo demás obrado en consecuencia, y el consecuente archivo de las actuaciones, estimando que, en el caso, corresponde procederse a la devolución del dinero incautado, depositado en el Banco de la Nación Argentina dado que, la documentación adjuntada por la defensa resulta fehaciente para acreditar la propiedad de la moneda de curso legal cuantiosa incautada.

Fiscalía Federal; 6 de junio de 2023.